



Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL-

SALA II

13.181/2024 “SHELL CAPSA (TF 37.106-A y ACUM) y OTROS c/DGA  
s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”

Buenos Aires, 16 de abril de 2025.-LR

**AUTOS, VISTOS y CONSIDERANDO:**

I.- Que, mediante [providencia](#) del 20/8/2024, en cuanto aquí interesa, el Tribunal impuso al Fisco Nacional, dada su condición de apelante, la carga individual de efectuar la comunicación a la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN) establecida en el artículo 8º de la ley 25.344 y en el artículo 12 del decreto 1116/2000 respecto de su presentación recursiva, debiendo acreditar dicha circunstancia en el expediente (conf. esp. punto 4º de la providencia bajo referencia).

El Fisco Nacional fue debidamente [notificado](#) de dicha providencia el mismo día en que fue dictada, sin cuestionar la normativa indicada, ni impugnar la carga impuesta en los términos de la ley 25.344.

II.- Que la caducidad de la instancia es un modo anormal de terminación del proceso, que se produce como consecuencia de la inactividad de la parte sobre la que recae la carga procesal de instarlo dentro del plazo legal (conf. Highton, Elena I. - Areán, Beatriz A., “*Código Procesal Civil y Comercial de la Nación*”, primera edición, Buenos Aires, Hammurabi, 2006, Tomo quinto, p. 664).

Se trata de un instituto de orden público, que va más allá del interés de las partes afectadas, cuyo fundamento radica en la necesidad de evitar la duración indefinida de los procesos judiciales, atentatoria de los valores de paz y seguridad jurídica a cuya vigencia apunta su recepción normativa. La interpretación restrictiva del instituto resulta aplicable cuando existen dudas razonables sobre el estado de abandono en el trámite del proceso, pero no cuando tal actitud aparece configurada en autos (conf. esta Sala, en autos 4118/2014 “*Yanzat, Norma Beatriz c/Mº de Justicia y DDHH s/Indemnizaciones - Ley 24043 - Art. 3*”, sent. del 12/2/2015 y su cita).



III.- Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 310, inciso 1º, del CPCCN, se producirá la caducidad en primera o única instancia cuando no se instara su curso dentro de seis meses.

IV.- Que, el artículo 311, 1º párrafo, del CPCCN establece que los plazos señalados en el artículo anterior se computarán desde la fecha de la última petición de las partes, o resolución o actuación del juez, secretario u oficial primero, que tenga por efecto impulsar el proceso; corriendo durante los días inhábiles salvo los correspondientes a las ferias judiciales.

Al punto, téngase presente que quien promueve un proceso asume la carga de urgir su desenvolvimiento y decisión en virtud del conocido principio dispositivo, sin perjuicio de las facultades conferidas al órgano judicial; quedando relevada de dicha carga procesal únicamente cuando al tribunal le concierne dictar una decisión (conf. CSJN, en autos D.494.XVIII “*Dalo, Héctor Rafael y otros c/Hidronor, Hidroeléctrica Norpatagónica S.A. y Neuquén, Provincia*”, sent. del 12/4/1994, *Fallos*, 317:369).

V.- Que de la compulsa de la causa se advierte que, entre la providencia por la que se impuso al Fisco Nacional la carga de llevar a cabo la comunicación a la PTN (dictada y notificada el 20/8/2024) y el día de la fecha, transcurrió el término legal previsto en el artículo 310, inciso 1º, del CPCCN, rector en la especie, sin que dicha parte hubiera dado cumplimiento a tal manda, ni efectuara actuación alguna tendiente a impulsar el proceso.

Al efecto téngase presente que:

-el auto por medio de la cual se impuso la carga incumplida, se encuentra firme y consentido; y

-los trámites relativos al pago del bono de derecho fijo previsto en el artículo 51, inciso d), de la ley 23.187, así como de la tasa de justicia, no tienen la aptitud de interrumpir el curso de la caducidad (conf.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL-  
SALA II

esta Sala, en autos 75.996/2017 “*Transportes Cantarini SRL c/DGA s/recurso directo de organismo externo*”, resol. del 9/8/2018, entre otros).

Por ello, corresponde decretar -de oficio- la caducidad de esta instancia judicial respecto del recurso de apelación intentado por el Fisco Nacional (conf. artículos 310, inciso 1º, y 316, ambos del CPCCN), con costas a su cargo (conf. artículo 68, primera parte, del CPCCN).

Por lo expuesto, el Tribunal, por mayoría, **RESUELVE:** declarar -de oficio- la caducidad de esta instancia judicial respecto del recurso de apelación intentado por el Fisco Nacional, con costas a su cargo.

Regístrese, notifíquese y, una vez firme la presente, pasen los autos a despacho, a efectos de proveer lo que por derecho corresponda.

MARÍA CLAUDIA CAPUTI  
(en disidencia)

JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA

LUIS MARÍA MÁRQUEZ

La doctora María Claudia Caputi dijo:

I.- Que, en vista de la razón de ser del artículo 8º de la ley 25.344, se deduce que en el caso bajo examen no cabe decretar la caducidad de instancia (conf., en idéntico sentido, mi voto en el caso nº 3010/2021 “*Núñez Villa, Carlos A. c/Dirección Gral. Impositiva s/recurso directo de organismo externo*”, decisión del 3/5/2022; entre otros).

En tal orden de ideas, cabe tener en cuenta que, como lo ha señalado la Corte Suprema de Justicia de la Nación en ocasión de analizar los antecedentes parlamentarios de la mencionada ley, surge de los mismos que, según el mensaje de elevación del respectivo proyecto que



había sido enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional, el capítulo referido a los juicios contra el Estado Nacional -donde se inserta el referido artículo 8º- tuvo por objeto, entre otras medidas propuestas para intentar revertir en el menor tiempo posible la grave situación económico financiera en la que se encontraba el país a la época del tratamiento del proyecto que se convertiría en la ley 25.344, “...hacer más eficiente la defensa del Estado Nacional cuando resulta demandado, garantizándole el ejercicio de la garantía constitucional de defensa en juicio” (conf. CSJN, en autos C.86.Tº XLI “*Cohen Arazi, Eduardo c/EN Jefatura de Gabinete resol. 155/01 y otro s/empleo público*”, sent. del 11/12/2007, *Fallos*, 330:5032, en especial su Considerando 4º).

Paralelamente, se tuvo especialmente en cuenta, a la hora de diseñar dichas normas procesales, la necesidad de enfrentar el pasivo judicial del Estado, habida cuenta de la significativa magnitud del mismo (ver Mensaje 42/99, en el orden del día 8, Cámara de Diputados, pág. 120/121; y autos “*Cohen Arazi*”, *op. cit.*).

II.- Que, conjuntamente con lo expresado, cabe considerar que, por ser la caducidad de la instancia un modo anormal de terminación del proceso y de interpretación restrictiva, la aplicación que de ella se haga debe adecuarse a ese carácter, sin llevar ritualmente el criterio que la preside más allá del ámbito que le es propio (conf. CSJN, *Fallos*, 319:1024, 1142 y 1769; 323:2067; 324:1992 y 3645; 325:3392, entre muchos otros; y más recientemente, en autos F.424.XLVII “*Fisco Nacional Administración Federal de Ingresos Públicos c/Fiorito, Parisi y asociados de Fiorito, Guillermo; Parisi, Luis; Fiorito Alejandro Sociedad de Hecho s/Ejecución fiscal*”, sentencia del 8/4/2014, esp. su Considerando 4º).

III.- Que, a la luz de los principios y pautas recordados precedentemente, concluyo que no cabe decretar la caducidad de la instancia, siendo que el recurso interpuesto por el Fisco Nacional determina que dicha entidad estatal (conf. decreto 618/1997) resulte parte actora en el proceso -y no demandada- (atento a que resulta ser el sujeto que promueve





Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL-  
SALA II

la jurisdicción de esta Cámara), y ello considerado con independencia de quién instó la intervención de dicho tribunal administrativo (actuación que no conduce a la carga de libramiento del oficio prevista por el artículo 8° de la ley 25.344).

Cobra virtualidad, entonces, el criterio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en cuanto a que la razón de ser de la respectiva comunicación consistió en garantizar o resguardar el derecho de defensa del Estado Nacional, al cual se estimó que cabía poner en conocimiento de los pleitos iniciados en su contra, supuesto que, concebido objetivamente, no se aprecia verificado en autos y descarta la conducencia de terminar anormalmente el litigio en esta oportunidad. **ASÍ VOTO.-**

MARÍA CLAUDIA CAPUTI

